

=====  
Ref. Queja nº 060104  
=====

Asunto: Educación Especial. Falta de educadores

Ilmo. Sr.:

Ante esta Institución se presentó escrito firmado por D<sup>a</sup> (...), y otros que quedó registrado con el número arriba referenciado y en el que sustancialmente denunciaban que sus hijos, alumnos de Educación Especial del C.P. Joaquín M<sup>a</sup> López de Alicante no pudieron reincorporarse, tras las vacaciones de Navidad a sus clases, debido al traslado de educadores, permaneciendo en dicha situación desde el día 9 de enero hasta el 17 del mismo mes.

Fundamentalmente exponían la situación que venía produciéndose año tras año cuando los alumnos de Educación Especial no pueden reincorporarse a sus clases al carecer del personal no docente necesario para su atención por la imprevisión de la Administración Educativa al cubrir las situaciones de baja o de traslado de los educadores, y la vulneración del derecho, constitucionalmente consagrado a una educación de calidad en términos de igualdad efectiva.

Considerando que la queja reunía los requisitos establecidos en los artículos 12 y 17 de la Ley 11/1988, de 26 de diciembre, del Síndic de Greuges, fue admitida, dando traslado de la misma a la Dirección General de Enseñanza, Secretaría Autonómica de Justicia, Interior y Administración Pública y Dirección Territorial de Educación en Alicante, de conformidad con lo determinado en el art. 18.1 de la citada Ley, con el objeto de contrastar las alegaciones formuladas por las interesadas con el ruego que nos remitiesen información suficiente sobre la realidad de las mismas, y demás circunstancias concurrentes en el presente supuesto.

La Subsecretaría de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, daba cuenta en su comunicación de que ... “Este departamento considera prioritaria y de máximo interés la provisión de los puestos de trabajo referidos por el autor de la queja con la inmediatez que la naturaleza del servicio a prestar requiere.

En este sentido, mediante solicitud de nombramiento de funcionarios interinos a la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, esta Subsecretaría inició con carácter inmediato el procedimiento de provisión temporal de los puestos que quedarían vacantes con motivo de la resolución de 1 de diciembre de 2005, por la que se adjudican destinos a los participantes en el concurso de méritos nº 49/2005.

Dicho procedimiento culminó con los correspondientes nombramientos de funcionarios interinos, efectuados por el Secretario Autonómico de Administraciones Públicas para ocupar los puestos vacantes, entre ellos los puestos adscritos al C.P. Joaquín M<sup>a</sup> López.”

La Dirección Territorial de Cultura, Educación y Deporte de Alicante emitió el dictamen que se relaciona:

“En relación con su escrito de fecha 31-01-2006, con registro de entrada en esta Dirección Territorial núm. 8469, de 3-02-2006, sobre la queja suscrita por D<sup>a</sup> (...) y otros ciudadanos más, sobre la falta de educadores en el C.P. “Joaquín María López” de Alicante, durante los días 9 al 17 de enero de 2006, y recabada la información oportuna, le comunico lo siguiente:

1º).- Como consecuencia del Concurso de Traslados de los Educadores de Educación Especial, con fecha 31 de diciembre de 2005, las tres educadoras adscritas al C.P. “Joaquín María López” de Alicante cesaron en sus puestos de trabajo, para tomar posesión en los puestos solicitados el 1 de enero de 2006.

2º).- Según consta en las resoluciones de la Dirección General de Administración Autonómica de las tres educadoras interinas que ocuparon los puestos de trabajo dejados vacantes en el C.P. “Joaquín M<sup>a</sup> López”, las propuestas de trabajo datan de fecha 21-12-2005.

Las citadas resoluciones citadas con anterioridad consta que fueron dictadas en fecha 13 de enero de 2006, comunicándose por fax a esta Dirección Territorial el 16 de los mismos a las 13'38.

3º).- El día 17 de enero de 2006, a las 9'00 horas de la mañana firmaban la toma de posesión las tres educadoras de Educación Especial para el C.P. “Joaquín M<sup>a</sup> López”, desplazándose esa misma mañana a su lugar de trabajo.

4º).- En cuanto a lo expresado por la interesada que desde el 9 al 17 de enero no se permitió por la dirección del centro que los menores asistieran a clase, se ha constatado que si hubo una información el mismo día 9 de enero por parte de la Sra. Directora del Colegio, a los padres que acompañaban a sus hijos, en el se les trasladaba la falta de educadores para atender con todos los servicios necesarios

que requieren los menores con necesidades educativas especiales, pero en ningún caso se les negó la asistencia al centro.”

La Dirección General de Administración Autonómica, por su parte, informó lo siguiente:

“En relación a la queja 060104, formulada por D<sup>a</sup> (...) y otros, sobre la imposibilidad de asistencia, en el periodo comprendido entre el 9 y 17 de enero de 2006, de 18 alumnos de Educación Especial al Colegio Joaquín María López de Alicante, al no disponer el centro de los correspondientes educadores, motivado este hecho por un concurso de traslados, se informa lo siguiente:

Por Resolución de 11 de abril de 2005, de esta Dirección General de Administración Autonómica (DOGV núm. 4.990, de 21 de abril de 2005), se convocó concurso de méritos núm. 49/2005, para la provisión de puestos de trabajo de naturaleza funcionaria!, sector administración especial, grupo C, Educadores de Educación Especial de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte.

Por Resolución de 1 de diciembre de 2005, de la misma Dirección General (DOGV núm. 5.154, de 14 de diciembre de 2005), se adjudican destinos a los participantes en el citado concurso.

Examinada la adjudicación definitiva de puestos, respecto a los educadores que venían prestando sus servicios profesionales en el centro objeto de la queja, resulta que:

-D<sup>a</sup> (...), ocupante en adscripción provisional del puesto núm. 16.815 del Colegio Público Joaquín María López, obtiene el puesto núm. 23.881 del IES Virgen del Remei.

El puesto 16.815, que fue ofertado en convocatoria, queda desierto, ya que fue solicitado únicamente por su ocupante, que finalmente, como se indica en el párrafo anterior, resultó adjudicatario del 23.881, al haberlo solicitado en primer lugar de su orden de prelación.

-D<sup>a</sup> (...), titular del puesto núm. 4.749 del Colegio Público Joaquín María López, obtiene el puesto núm. 20.046 del IES Fígueres Pacheco.

- D<sup>a</sup> (...), titular del puesto núm. 466 del Colegio Público Joaquín María López, es adjudicatario del puesto 16.803 del Colegio Público Joaquín Sorolla.

El apartado cuarto de la resolución por la que se adjudicaron destinos, establecía el cese de oficio en fecha 31 de diciembre de 2005 del personal que ocupaba puesto de trabajo y había obtenido destino en el concurso.

Igualmente cesarían de oficio en la misma fecha, el personal que ocupaba un puesto de trabajo adjudicado.

La toma de posesión tuvo lugar en fecha 2 de enero de 2006, con efectos económicos y administrativos de 1 de enero de 2006. Es pues, desde dicha fecha, cuando los tres puestos del Colegio Público Joaquín María López quedan vacantes.

Mediante escrito del Subsecretario de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, de fecha 21 de diciembre de 2005, y a la vista de la adjudicación definitiva del concurso núm. 49/2005, se había solicitado autorización urgente para la cobertura por personal componente de la bolsa de trabajo del correspondiente colectivo, de diversos puestos de Educadores de Educación Especial que iban a quedar vacantes tras finalizar el concurso de traslados. En la relación de puestos cuya cobertura se solicitaba se incluían los tres puestos del C.P. Joaquín María López.

Por la Dirección General de Presupuestos y Gastos, mediante escrito de fecha 23 de diciembre de 2005, con entrada en este Servicio vía fax el 28 de diciembre, se emite el preceptivo informe favorable relativo a la autorización para la contratación de personal temporal y/o nombramiento de funcionario interino.

Para cubrir todos los puestos con la máxima celeridad, y de conformidad con el procedimiento de asignación de puestos vacantes previsto en la Orden de 10 de noviembre de 2004, sobre regulación de bolsas de empleo temporal para proveer provisionalmente puesto de trabajo de la administración del Consell (DOGV núm. 4.885, de 17 de noviembre de 2005), de aplicación en aquel momento, se optó por celebrar un acto único telefónico para la oferta y adjudicación de puestos, procedimiento mucho más rápido y ágil que el presencial.

Para ello, fue necesaria la realización previa de los siguientes trámites:

- Verificar la situación de cada una de las plazas que debían ser ofertadas en la provincia de Alicante que ascendía a un total de 15 de puestos de trabajo (comprobación de que persiste la necesidad de cobertura, que no está en trámite una comisión de servicios, que no hay pendiente modificación alguna de porcentaje de ocupación, ubicación física real de los puestos ...)
- Comunicar la celebración del acto con la debida antelación: se debe realizar al menos 72 horas antes del acto de adjudicación, ya que en primer lugar se les convoca telefónicamente y en caso de no poder contactar, se ha de disponer de un plazo mínimo de 48 horas para enviar un telegrama al

domicilio que deje constancia de un intento de notificación fehaciente. Hubo que realizar numerosas llamadas para localizar a los componentes (se convocó a un total de 19 personas), ya que en caso de no poder contactar - el día del acto- con uno de ellos, esta circunstancia paraliza el proceso de provisión al no ser posible pasar al siguiente que por turno corresponda. Las fechas en las que se realizó todo el proceso coincidieron con el periodo vacacional de la semana de Reyes, lo que dificultó en gran medida la localización de cada uno de ellos.

El acto telefónico se pudo llevar a cabo por este Servicio en fecha 12 de enero de 2006, realizando al día siguiente 13 de enero, los correspondientes nombramientos, que finalmente fueron firmados por el Secretario Autonómico de Administraciones Públicas el 16 de enero de 2006. El mismo día fueron remitidos vía fax al Servicio de Personal Administrativo y Laboral de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte para que formalizara las tomas de posesión y la incorporación de los profesionales a sus puestos de trabajo.

Del relato se extrae que se ha actuado con la máxima celeridad y cumpliendo escrupulosamente la normativa vigente.

Por último, indicar que no sólo se cubrieron los tres puestos objeto de la queja sino que en las mismas fechas se realizaron los procesos de provisión de los puestos autorizados en las provincias de Valencia y Castellón.”

Las comunicaciones fueron puestas de manifiesto a las interesadas al objeto de que formularan las alegaciones que tuvieran por convenientes, como así hicieron, ratificando íntegramente su escrito inicial de queja, y señalando que:

“En referencia al escrito de la Subsecretaría de Servicio de Personal Administrativo y Laboral, si ese “departamento considera prioritaria y de máximo interés la provisión de los puestos de trabajo” (textual párrafo 2º) y teniendo en cuenta que sabían que quedaban vacantes con la resolución del 01.12.2005; no se puede comprender cómo es posible que el día 09.01.2006 no se hubieran cubierto esos puestos, ya que estamos hablando de niños que imprescindiblemente necesitan educadores para asistir a clase, por lo que expongo lo siguiente: 1º Teniendo en cuenta que esta Subsecretaría solicita el nombramiento a la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, cabe pensar que no hubo coordinación entre la Subsecretaría y la Conselleria o que alguna de ellas no actuó con la debida “prioridad y máximo interés”. Ya que tuvieron un mes y ocho días para solucionar el problema.

2º La Administración, en su función de administrar a personas, a veces olvida este hecho; “imponiendo su funcionamiento interno por encima de los derechos de los administrados”.

3º Por lo que realmente, lo que nos interesa a los padres afectados por esta situación, es que casos como este, donde niños discapacitados se encuentran totalmente indefensos ante la burocracia, no se vuelvan a repetir.”

La resolución favorable, si bien tardíamente, de la cuestión planteada no es óbice para que esta Institución, como garante de los derechos fundamentales recogidos en el Título I de la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía, realice diversas consideraciones, ya que la Constitución Española, en su artículo 49, recomienda a los poderes públicos realizar una política de previsión, tratamiento y rehabilitación a favor de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que es preciso prestar la atención especializada que requieren y ampararlos para el disfrute de los derechos que nuestra Carta Magna reconoce a todos en el Título I, y entre ellos, el derecho a la educación, en términos de igualdad efectiva.

Como ya puso de manifiesto la exposición de motivos de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, las personas con discapacidad constituyen un sector de población heterogéneo, pero todas tienen en común que, en mayor o menor medida, precisan garantías suplementarias para vivir con plenitud de derechos o para participar en igualdad de condiciones en la vida económica, social y cultural.

La Constitución Española reconoce en su artículo 14 la igualdad ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna. A su vez, el artículo 9.2 de nuestra Norma Fundamental establece que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que dificulten o impidan su plenitud y facilitando su participación en la vida política, cultural y social. Asimismo, el artículo 10 de la Constitución establece que la dignidad de la persona constituye el fundamento del orden político y la paz social.

En congruencia con estos preceptos, y como ya hemos señalado, el propio texto constitucional, en su artículo 49, refiriéndose a las personas con discapacidad, ordena a los poderes públicos que presten la atención especializada que requieran y el amparo especial para el disfrute de los derechos.

Consecuencia de esta especial necesidad de protección y promoción de la igualdad de las personas con discapacidad ha sido la paulatina creación de un importante cuerpo legal tendente a garantizar aquella en los distintos ámbitos susceptibles de actuación de los poderes públicos.

De esta forma, la Ley 13/1982, de 7 de abril, sobre Integración Social de los Minusválidos, tras establecer en su artículo 1 que “los principios que inspiran la presente Ley se fundamentan en los derechos que el artículo 49 de la Constitución reconoce, en razón de la dignidad que les es propia, a los disminuidos en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales para su completa realización personal y su total integración social, y a los disminuidos profundos para la asistencia y tutela necesarias”, preceptuaba en su artículo 3 que “los poderes públicos prestarán todos los recursos necesarios para el ejercicio de los derechos a que se refiere el artículo 1, constituyendo una obligación del Estado la prevención, los cuidados médicos y psicológicos, la rehabilitación adecuada, la educación, la

orientación, la integración laboral, la garantía de unos derechos económicos, jurídicos sociales mínimos y la Seguridad Social”, añadiendo a continuación que “a estos efectos estarán obligados a participar, para su efectiva realización, en su ámbito de competencias correspondientes, la Administración Central, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales, los Sindicatos, las entidades y organismos públicos y las asociaciones y personas privadas”.

Por su parte, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, anteriormente mencionada, insistiendo en la necesidad de garantizar la plena integración social de las personas con discapacidad, elevó a la categoría de principio rector de la Ley, entre otros, el de normalización, entendido como “el principio en virtud del cual las personas con discapacidad deben poder llevar una vida normal, accediendo a los mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios que están a disposición de cualquier persona normal”.

Al abrigo de las normas anteriormente enunciadas, la Generalitat Valenciana ha asumido como propios los objetivos anteriormente reseñados, dictando al efecto numerosas normas legales que comparten, como principio inspirador, el mandato constitucional de defensa y efectividad real del principio de igualdad. En este sentido, destaca de manera especial la Ley 11/2003, de 10 de abril, sobre el Estatuto de las Personas con Discapacidad.

Esta norma reconoce, en su exposición de motivos, que constituyen principios esenciales de la Ley, que como tal debe marcar la actuación de las Instituciones de la Generalitat, los de “autonomía, participación, principio de integración y el de responsabilidad pública, mediante el cual la Generalitat procurará paulatinamente aumentar la dotación económica presupuestaria para alcanzar la plena realización de los principios que vienen recogidos en esta Ley, y en especial, para que las personas con discapacidad puedan disfrutar del principio de igualdad de oportunidades”, de manera que la Generalitat pueda “dar una respuesta adecuada y coordinada a las necesidades de las personas con discapacidad, con la finalidad última de mejorar sus condiciones de vida y conseguir su integración sociolaboral” . Consecuencia de esta declaración resulta el mandato normativo contenido en el artículo 1 de la Ley, de acuerdo con el cual “constituye el objeto primordial de la presente Ley la regulación de la actuación de las administraciones públicas valencianas dirigida a la atención y promoción del bienestar y calidad de vida de las personas con discapacidad, posibilitando su habilitación, rehabilitación e integración social con el fin de hacer efectivo el derecho a la igualdad reconocido por la Constitución Española. Se regulan los principios rectores de la actuación de dicha Administración en cuanto a la prevención de las discapacidades, la ordenación de la tipología de centros y servicios de acción social destinados a las personas con discapacidad y la fijación del correspondiente régimen de infracciones y sanciones”, siendo por ello mismo aplicables sus disposiciones “en todas las actuaciones y servicios que, en el ámbito de las personas con discapacidad y dentro del territorio de la Comunidad Valenciana,

lleven a cabo la Administración de la Generalitat, o sus entidades autónomas y las empresas de la Generalitat contempladas en la legislación pública valenciana, así como las corporaciones locales de la Comunidad Valenciana, así como las entidades públicas y privadas que colaboren con ellas”.

Por su parte, el artículo 4, desarrollando legalmente los principios manifestados en la exposición de motivos, declara que “la Administración de la Generalitat, o sus entidades autónomas y las empresas de la Generalitat contempladas en la legislación pública valenciana, adoptarán medidas tendentes a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, eliminando los obstáculos que impidan su integración social, rigiéndose en sus actuaciones por los siguientes principios:

1. *Principio de no discriminación*, sin que pueda prevalecer discriminación alguna, tanto directa como indirecta, por motivo de discapacidad, ni discriminación en la forma de negarse a facilitar los ajustes razonables, para que el derecho a la igualdad de trato sea real y efectivo.

2. *Principios de autonomía*, promoviendo el mayor grado de autosuficiencia y libre elección de las personas con discapacidad, sin perjuicio de prestarles la asistencia adecuada en los casos en que resulte necesaria por su grado y tipo de discapacidad. Se promoverá, mediante los programas y actuaciones correspondientes el acceso de las personas con discapacidad a una vida independiente caracterizada por la autosuficiencia económica y la asunción de protagonismo en las decisiones que afectan a su desenvolvimiento diario.

3. *Principio de participación*, como derecho de las personas con discapacidad y de las organizaciones y asociaciones que las representen a intervenir en el proceso de toma de decisiones que afecten a sus condiciones de vida.

4. *Principio de integración*: la promoción educativa, cultural, laboral y social de las personas con discapacidad, se llevará a cabo procurando su inserción en la sociedad a través del uso de los recursos generales de que se disponga. Sólo cuando por las características de su discapacidad requieran una atención específica ésta podrá prestarse a través de servicios y centros especiales.

5. *Principio de igualdad de oportunidades*: se garantizará el acceso de las personas con discapacidad a los bienes y recursos generales de la sociedad, si es necesario a través de recursos complementarios y, en cualquier caso, eliminando toda forma de discriminación y limitación que le sea ajena a la condición propia de dichas personas. En la aplicación de este principio, las Administraciones Públicas tendrán en cuenta las necesidades particulares de las personas o colectivos de personas con discapacidad, sobre todo en cuanto hace al diseño y provisión de servicios y recursos específicos para cada una de ellas, procurando garantizar la cobertura territorial.

6. *Principio de responsabilidad pública*: la Administración de la Generalitat, o sus entidades autónomas y las empresas de la Generalitat contempladas en la legislación pública valenciana, procurarán, dentro de sus disponibilidades presupuestarias, los medios y destinará los recursos financieros, técnicos, humanos y organizativos necesarios para alcanzar la plena realización de los principios que

se enumeran en el presente artículo. Igualmente, las corporaciones locales, las entidades y organismos públicos, los agentes sociales y las asociaciones y personas privadas, en sus ámbitos de competencias correspondientes, participarán y colaborarán con ese mismo fin”.

Por lo que hace referencia al ámbito educativo, la Ley indica de manera precisa en su artículo 18 que “la Conselleria u organismo de la Generalidad Valenciana con competencias en materia de educación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos siguientes, será la encargada de garantizar una política de fomento de la educación y del proceso educativo adecuado para las personas con discapacidad”, añadiendo con posterioridad en el artículo 19 que “f) Se facilitará la puesta en marcha de opciones educativas tendentes a conseguir el desarrollo integral del alumnado con discapacidad” y “g) La administración de la Generalitat dotará a los centros educativos sostenidos con fondos públicos, a todos los niveles, de los recursos necesarios, humanos y/o materiales, para atender las necesidades del alumnado con discapacidad, así como implementará las adaptaciones curriculares necesarias para afrontar con éxito la tarea educativa, llevando a cabo para ello las agrupaciones que resulten pertinentes”.

En el orden educativo, la LOGSE (Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo), reconoce en su artículo 36 el derecho que asiste al alumnado con necesidades educativas especiales, sean temporales o permanentes, a disponer de los recursos necesarios para alcanzar, dentro del sistema educativo, los objetivos establecidos, con carácter general, para todos los alumnos.

En el mismo sentido, el artículo 37 del mismo cuerpo legal, dispone que para lograr las finalidades señaladas en el artículo, el sistema educativo deberá disponer de las especialidades correspondientes y de profesionales cualificados, como también de los medios y materiales precisos para la participación en el proceso de aprendizaje de los alumnos con necesidades educativas especiales.

En el ámbito de la legislación educativa, el Decreto 39/1998, de 31 de marzo, del Gobierno Valenciano, de ordenación de la educación para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales ha sido el encargado de desarrollar y plasmar los principios anteriormente reseñados en este específico ámbito.

El artículo 3 de esta norma indica de manera incontestable y precisa que “1. Con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades y el derecho de los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales a una educación de calidad, la administración educativa de la Generalitat Valenciana garantizará las condiciones, las medidas y los medios necesarios en la forma en que establece el presente Decreto. La Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia velará para que se eliminen las barreras físicas y comunicativas.

2. La Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia velará para que el alumnado con necesidades educativas especiales cuente con la ayuda precisa para progresar en su desarrollo y proceso de aprendizaje, de acuerdo con sus capacidades”.

Por su parte, el artículo 4, con la finalidad de garantizar la efectividad de estos derechos, establece que “la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia dotará a los centros docentes sostenidos con fondos públicos con recursos, medios y apoyos complementarios a los previstos con carácter general en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, cuando el número de alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales escolarizados en ellos y la naturaleza de las mismas así lo requiera”, añadiendo a renglón seguido que, en consecuencia, “La administración educativa facilitará a los centros docentes públicos dependientes de la Generalitat Valenciana, el equipamiento didáctico y los medios técnicos precisos que posibiliten la participación de los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales en todas las actividades escolares” (Artículo 5). Del mismo modo, e insistiendo en esta línea de pensamiento, el artículo 10 de esta norma preceptúa que “la administración educativa procurará una atención prioritaria al conjunto de factores que favorecen la calidad y mejora de la enseñanza del alumnado con necesidades educativas especiales. A tal fin, adoptará las medidas oportunas para la cualificación y formación del profesorado, la elaboración de los proyectos curriculares y de la programación docente, la dotación de medios personales y materiales, y la promoción de la innovación e investigación educativa”.

Por su parte, la Ley Orgánica 9/1995 de 20 de noviembre, de Participación, Evaluación y Gobierno de los centros docentes, en su Disposición Adicional Segunda, referida a la escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales, aplicables a centros docentes sostenidos con fondos públicos, independientemente de su titularidad, establece que “las administraciones educativas habrán de dotar a los centros de los recursos necesarios para atender adecuadamente a estos alumnos. Los criterios para determinar estas dotaciones serán los mismos que para los centros sostenidos con fondos públicos”.

Consecuentemente con cuanto antecede, los alumnos con necesidades educativas especiales tienen derecho a que la Administración Educativa les facilite el acceso a los recursos, medios materiales o ayudas específicas para su participación en el proceso de aprendizaje en condiciones de igualdad respecto a los demás alumnos, de tal suerte que puedan alcanzar los objetivos educativos establecidos con carácter general.

La problemática planteada por la presente queja debe ser analizada partiendo de las normas anteriormente expresadas y, sobre todo, de los principios y de la filosofía que de ellas dimanar. El simple estudio de la normativa que sobre personas con discapacidad ha ido surgiendo al abrigo de la Constitución española y, en especial, de su artículo 49, pone de manifiesto que el objetivo final que la actuación de los poderes públicos debe perseguir en este ámbito, y en la medida de sus posibilidades, garantizar, es la mejora de la calidad de vida de este grupo heterogéneo de personas, mediante la consecución de su plena integración social y, por ello mismo, mediante el pleno logro de su igualdad efectiva con el resto del cuerpo social.

En este sentido, se puede afirmar, sin miedo a errar en exceso, que todas las obligaciones y deberes de actuación que la legislación impone a los poderes públicos se hallan íntimamente destinados a la consecución de estos objetivos. Por ello mismo, y considerado a la inversa, la actuación de los poderes públicos en este ámbito debe ser analizada y juzgada en función de la contribución que la misma realice a la satisfacción de aquéllos.

En este sentido, y a pesar del cumplimiento formal de las obligaciones más inmediatas que pesan sobre la Administración educativa (evaluación de la discapacidad y escolarización del menor en centro adecuado a sus necesidades, dotados de los medios personales que resulten precisos), la actuación pública descrita con anterioridad no puede merecer, por parte de esta Institución, la consideración de plenamente ajustada a Derecho y respetuosa con los derechos de los interesados.

En efecto, de la normativa anteriormente enunciada se deduce que, en aras a la satisfacción del principio de autonomía y como consecuencia del principio de responsabilidad pública, las Administraciones Públicas deben garantizar la existencia de los medios técnicos y personales necesarios para garantizar la escolarización de las personas con discapacidad, promoviendo de esta forma tanto la efectividad del derecho a una educación de calidad como la integración social, permitiendo con ello la consiguiente consecución de la mejora en la calidad de vida de estas personas.

La satisfacción tardía y parcial de los derechos anteriormente mencionados debe ser entendida como una causa directa de perjuicios para la igualdad efectiva en el disfrute del derecho a la educación, y por ende, para la plena integración social de los menores y, por ello, como un incumplimiento de las obligaciones que, en este ámbito, pesan sobre los poderes públicos.

Por cuanto antecede y de conformidad con lo previsto en el artículo 29 de la Ley de la Generalitat Valenciana 11/1988, de 26 de diciembre, reguladora de esta Institución, formulamos a la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte y a la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas las siguientes sugerencias:

- Primera. Que adopte cuantas medidas organizativas y presupuestarias sean precisas para asegurar la dotación de recursos personales y materiales en aras del adecuado disfrute, por parte de los alumnos con discapacidad, del derecho a una educación de calidad en condiciones de plena igualdad y efectividad.
- Segunda. Que, en casos como el analizado, se agilice al máximo -en el ámbito de las respectivas competencias de cada órgano involucrado en ese proceso-, tanto los trámites administrativos de creación y provisión de puestos de trabajo, como -y especialmente- los trámites previos de evaluación de futuras necesidades, todo ello

en aras a garantizar en plazo la adecuada escolarización de los alumnos discapacitados.

Asimismo, de acuerdo con la normativa citada, le agradecemos nos remita en el plazo de un mes, el preceptivo informe en el que nos manifieste la aceptación de la Sugerencia que se realiza, o en su caso, las razones que estime para no aceptarla.

Para su conocimiento, le hago saber, igualmente, que, a partir del mes siguiente a la fecha en la que se ha dictado la presente resolución, ésta se insertará en la página Web de la Institución.

Le saluda atentamente,

Carlos Morenilla Jiménez  
Adjunto Segundo del Síndic de Greuges